

filando como una clase de separación, que produce efectos jurídicos, aunque no sean los mismos que los de la separación judicial. Está ahí y no puede ser ignorada por el derecho: se trata de que la doctrina la estudie en sus diversas modalidades y la estructure jurídicamente.

Se trata de ver, en primer lugar, qué situaciones concretas integran la figura de la separación de hecho. Para unos cualquier situación objetiva de no-convivencia que no tenga un origen o una ratificación judicial, es separación de hecho. Para otros sólo puede hablarse de separación de hecho cuando en algún momento, anterior o posterior a la ruptura de la convivencia, las voluntades de los cónyuges convergen en crear o aceptar semejante situación, sin someterla a ninguna intervención judicial. Esta relevancia del elemento volitivo, como parte constitutiva de la separación de hecho, parece necesaria si quiere evitarse la consagración del repudio.

Desde esta segunda posición, rechaza Franceschelli que puedan considerarse separaciones de hecho tanto la interrupción de la convivencia que no sea interpretada como tal separación por los cónyuges, como el aban-

dono unilateral al que se opone el cónyuge abandonado.

Al tema de los efectos de la separación de hecho, se dedica la última parte de la monografía. Comienza por una exposición bastante cuidada de los efectos de esta clase de separación, en los sistemas belga, francés, español, inglés, norteamericano y alemán, sobre todo en cuanto a su relevancia como causa de divorcio.

Por último se extiende en el examen de los efectos de la separación de hecho en el derecho italiano, relacionándola con el divorcio, el desconocimiento de la paternidad, los deberes de fidelidad y ayuda mutua, los alimentos, la reanudación de la convivencia, las relaciones patrimoniales, la custodia de los hijos, la adopción y el prohijamiento, el domicilio, la comunidad de bienes, y, por último, estudia la separación de hecho como causa de separación judicial.

En las conclusiones vuelve a poner de relieve la caracterización de la separación de hecho por el elemento volitivo y la semejanza y distinción de sus efectos con los de la separación judicial.

JOSÉ T. MARTÍN DE AGAR

FUNCIONES DEL PROMOTOR DE JUSTICIA

MESZAROS, J. C., *The present and possible functions of promoter of justice in administrative procedures of the Church*, VII + 105 págs., Roma 1980.

La presente obra es una *excerpta* de la tesis doctoral presentada por el autor en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Santo Tomás en Roma. En sus tres capítulos

estudia el desarrollo histórico y jurídico de la figura del promotor de justicia, las competencias y procedimientos de la Sección 2.^a de la Signatura Apostólica y, por último, las funcio-

nes tanto actuales como posibles del promotor de justicia en los procedimientos administrativos de la Iglesia. En sendos apéndices recoge algunos artículos de las *Normae speciales* de la Signatura, unos cuantos cánones del Código de Derecho Canónico y otros artículos de la Instrucción *Provida Mater Ecclesia*.

Parece ser que el oficio de promotor de justicia tiene su origen en el ámbito del proceso inquisitorial penal, como un colaborador del obispo diocesano en el cumplimiento de dicha investigación. Inicialmente recibe diversos nombres, entre los cuales el autor de este estudio prefiere quedarse con el de *Procurator fiscalis*, procurador fiscal. En esos primeros siglos de su andadura (ss. XIV y XV) no se trata de un oficio estable, y sus funciones dependen del Ordinario. Muchas de ellas van siendo determinadas por los usos y costumbres del lugar o de la época.

Con el tiempo los Romanos Pontífices van encomendando diversas funciones a estos procuradores fiscales, tanto en el campo de los juicios criminales (acusación, citación, prosecución de las causas, y ejecución de las sentencias) como en la defensa de los derechos de aquéllos que no pueden valerse por sí mismos (menores, personas jurídicas) y en cuestiones de equidad.

Entre los siglos XVI y XVIII se desglosan tres oficios diferentes a partir de ese núcleo común: de una parte el promotor de la fe, para las causas de beatificación y canonización; de otra el defensor del vínculo en las causas sobre el matrimonio, para ocuparse de su defensa; y por último el promotor de justicia, al cual se le encomienda la salvaguarda de la ley y de la justicia en relación al bien común de la

Iglesia, en una serie larga de procesos y procedimientos de naturaleza variada: en las causas criminales, en algunas contenciosas como las matrimoniales, y las que afectan a menores o personas a ellos equiparadas. Esta es la disciplina que pasa al Código de 1917, que encuadra la figura del promotor de justicia entre los ministerios auxiliares del poder judicial, y cuya intervención se prevé en actos como los referentes a la inquisición y acusación del reo y del vínculo, recurso contra inadmisión del libelo, cuestiones incidentales, contumacia, remedios contra la sentencia y beneficio de pobreza. Si quisiéramos determinar la naturaleza de las diversas funciones, habríamos de decir que el promotor de justicia en unos casos actúa como parte —y además activa—, mientras que en otros desempeña funciones meramente consultivas.

El cap. II de la obra está dedicado al estudio de lo que su autor denomina «procedimientos administrativos de la administración de justicia», terminología que a nuestro entender se presta a equívoco y que habría que matizar. En efecto, de lo que trata es de las competencias y procedimientos de la Sección segunda del Tribunal de la Signatura Apostólica, e independientemente de que se considere a la misma como un tribunal judicial o un tribunal administrativo, lo cierto es que se trata de un órgano jurisdiccional, no de un órgano administrativo. Por consiguiente, seríamos más partidarios de que se hablara de «procedimientos jurisdiccionales de la justicia administrativa», los cuales se distinguirían así claramente tanto de los procedimientos jurisdiccionales de la justicia ordinaria, como de los procedimientos administrativos (de los órganos administrativos).

Se podrá objetar a esto que hay algunas competencias de la Sección 2.^a que no son jurisdiccionales, sino consultivas, como sostiene el autor con referencia a la segunda de las contenidas en la C.A. *Regimini Ecclesiae Universae*, art. 107 («cognoscit negotia administrativa a Romanae Curiae Congregationibus ipsi delata»). Sin embargo pensamos que aún en estos casos se trata de una cuestión contenciosa, que debe resolver conforme a Derecho, en calidad de tribunal, como se desprende del tenor de dicho artículo («cognoscit») y de las normas procedimentales pertinentes (cf. *Normae speciales*, art. 125) y como expresamente confirma una decisión del mismo (vid. en este mismo número de «Ius Canonicum» las notas 19 y 20 de nuestro artículo sobre la Signatura y los tribunales administrativos). Lo que en cualquier caso queda fuera de toda duda es que el procedimiento contencioso-administrativo del art. 106 de la C.A. es jurisdiccional, no administrativo, y que las normas supletorias son las del proceso judicial (cf. *Normae speciales*, art. 126).

Este capítulo II es introductorio al estudio que en el capítulo III se hace de las funciones que el promotor de justicia desempeña o puede desempeñar en el futuro en los considerados por el autor procedimientos administrativos. Además de sus cometidos señalados por las *Normae speciales* en el contencioso-administrativo ante la Signatura (Sección I de dicho capítulo), se analizan las posibles funciones en los llamados procedimientos administrativos del Código de 1917 (Sección II). En este último campo los resultados no pueden ser más exigüos:

sobre no ser administrativos los procedimientos de la transacción y el compromiso *in arbitros* —sino verdaderos convenios entre particulares—, el promotor de justicia no tiene motivos para intervenir en ellos. Y en procedimientos ciertamente administrativos como la remoción o traslado de párrocos y la imposición de ciertas penas, la intervención de tal ministro es hipotética, no contemplada por el Derecho y, cuando más, de simple asesoramiento.

Por último, la Sección III está dedicada al estudio del *Schema de procedura administrativa*, tanto en su aspecto de formación del acto administrativo como en el de su revisión o impugnación con sus tres posibilidades: petición al autor del acto, recurso jerárquico y recurso a la jurisdicción administrativa.

La intervención del promotor de justicia en estos procedimientos será necesaria cuando el juez o el Ordinario consideren que está en causa el bien público. Aplicando una norma del *Schema de processibus*, el autor estima que debe llamarse al promotor de justicia siempre que se hallen implicados en la cuestión la libertad de la Iglesia o los derechos de los menores o de las personas morales. El modo primario en que puede realizarse esa intervención para proteger el bien público es como parte en la causa, como cuando el representante de una persona moral le origina a ésta un perjuicio por abuso de sus poderes administrativos. Otro modo complementario de actuación es como consultor del tribunal, en cuanto que el promotor de justicia es un experto legal.

E. LABANDEIRA